JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL

San Luis De Cubarral (M).

Septiembre veintiuno (21) de dos mil veintidós (2022)-.

Rad. No. 502234089001-2021-00008-00

Auto No. 073-.

Motivo de la providencia:

Se resuelve el recurso de reposición y subsidiario de apelación, incoado por el apoderado de los señores José Gregorio Dueñas Ordóñez y Araminta Dueñas Ordóñez, en contra del auto de fecha 1° de septiembre de 2022, mediante el cual se designó Curador ad Litem a la señora María del Carmen dueñas de Bernal.

Hace consistir su recurso, básicamente, en que este despacho en auto del 14 de enero del año en curso, frente a la misma petición de la parte actora, aconsejó dar aplicación al artículo 2. 2. 4. 5. 2. 4. del decreto 1429 del 5 de noviembre de 2020, toda vez que la situación de la demandada María del Carmen dueñas de Bernal corresponde con el objeto de la ley 1996 de 2019, artículo primero. Agrega, en cuanto a la capacidad de las personas, que ésta se presume, como lo impone el artículo 1503 del código civil colombiano, en consonancia con el artículo 6° de la ley 1996 de 2019, por ello, designarle un curador ad litem a la demandada en condición de persona mayor de edad con una presunta discapacidad, supone la restricción o el desconocimiento de su capacidad legal y la vulneración de variados derechos fundamentales.

Señala que la decisión de designar curador ad litem para la demandada María del Carmen dueñas, desborda los parámetros legales de esta institución, porque la ley 1996 de 2019, en su artículo 6°, presume la capacidad de todas las personas con discapacidad. Agrega que la institución de curador ad litem fue diseñada por el legislador para las personas incapaces, ausentes en el proceso e indeterminados. De otro lado, sostiene, la decisión subroga la institución y el procedimiento de apoyos previsto en la ley 1996 de 2019, por la del curador ad litem, máxime si la primera de ellas es competencia de los jueces de familia, de conformidad con los artículos 14, 32 y siguientes de la ley 1996 de 2019, para las cuales el juez civil municipal carece de competencia.

Advierte a continuación, que al mantener la representación por medio del curador ad litem, dispuesta en el auto recurrido, puede incurrirse en nulidades procesales reguladas en el artículo 133 numerales 4 y 8 y artículo 16 del código general del proceso.

Acorde con la precedente exposición, peticona dos solicitudes: que se

Juzgado Promiscuo Municipal

Carrera 9 No. 8-12 San Luis de Cubarral (Meta)

Correo electrónico institucional: J01prmcubarral@cendoj.ramajudicial.gov.co

reponga el auto de fecha 1° de septiembre de 2022, por infracción de la ley 1996 de 2019, artículo 6°, al desconocer la presunción de capacidad de la señora María del Carmen Dueñas y en su lugar disponer que los interesados acudan al procedimiento diseñado en la norma citada. En segundo lugar, conceder el recurso de apelación.

Para resolver se considera:

Debe advertirse inicialmente que, como una especie de legitimación, el recurrente deberá tener interés para proponer el recurso de que se trate, pues, si así no es, el recurso deviene en improcedente ya que aletarga la agilidad del procedimiento. Ese interés consiste en que la decisión tomada en la providencia afecte, de forma negativa, el derecho que una de las partes quiera hacer valer en el proceso. En otras palabras, solamente la parte que recibe un perjuicio con la decisión es la única legitimada para recurrir la providencia con el fin de que ésta sea subsanada.

Como puede verse, el apoderado de los señores José Gregorio Dueñas Ordóñez y Araminta Dueñas Ordóñez no es apoderado, ni representa a la señora María del Carmen dueñas de Bernal; la parte que representa no recibe ningún tipo de perjuicio con la determinación que tomó el juzgado, pues se trata de dos, entre otros más, de los demandados en el presente proceso de pertenencia, así que por este extremo no le asistiría interés para recurrir, por lo cual se deberían desestimar sus planteamientos.

Es necesario resaltar que la parte que debería ser la recurrente, la demandante, sobre la base de que el allanamiento de la señora María del Carmen dueñas de Bernal le favorecería, en una actitud procesal transparente y leal con las partes y el juez, solicita que se designe apoderado a la señora Dueñas, para evitar posteriores nulidades.

No obstante lo dicho, el estrado dará respuesta al recurso.

Se observa de entrada el rigorismo con que el recurrente interpreta la normatividad aplicable para resolver la petición realizada por el extremo demandante, que podría calificarse como de excesivo ritual, pues se debe partir de que la capacidad legal, según los artículos 6° y 8° de la Ley 1996/17, se presume, siendo ésta una presunción legal y como tal susceptible de admitir prueba en contrario. Esa prueba no es otra que la certificación aportada por el demandante, según la cual, la señora María del Carmen dueñas de Bernal sufre una discapacidad consistente en una deficiencia neurológica por secuela de ataque cerebrovascular que afecta severamente y de forma permanente el lenguaje, el

movimiento y la independencia funcional referida a la movilidad y destreza, y en su independencia higiénica. Desde luego, no es que se enerve la presunción de manera cabal, pero sí tal capacidad se mengua muy ostensiblemente.

Por esa razón fundamental, con apoyo en los artículos 4 y 11 del CGP y los incisos 2 y 3 del artículo 13 de la Constitución Política, se inclinó el despacho por acoger favorablemente la petición de la parte demandante, de designar un curador ad litem, figura que, junto al amparo de pobreza, son las únicas que prevé el CGP para la defensa de personas que, se advierta, se hallan en circunstancias de debilidad o inferioridad procesal con respecto a las otras que comparecen al proceso. Así mismo, se trata de lograr el equilibrio en el proceso tal y como manda el artículo 4º del citado plexo normativo procesal y los incisos 2 y 3 del artículo 13 constitucional.

Repárese en que el CGP en su artículo 156, inciso 1º, para el apoderado designado en aplicación del amparo de pobreza, asigna las funciones del curador ad litem, luego hay un vestigio de la posibilidad de asignar un curador en casos como el presente y no solamente para los cometidos previstos genéricamente en los artículos 54 y ss. del CGP.

Para abundar en razones, mírese que la respuesta a la demanda de la señora María del Carmen dueñas de Bernal, quien es persona en situación de discapacidad como enantes se dijo, en la forma de allanarse a las pretensiones de la misma, es un acto jurídico que la afecta negativamente. Por esa vía, este juzgador ignora como llegó a esa decisión, con qué ayudas contó e ignora si esa es su real voluntad, tal y como lo haría una persona que dispone de plena capacidad para exteriorizar su voluntad, sin el tipo de inhabilidad que tiene la señora Dueñas. No debe perderse de vista que la discapacidad que afronta, precisamente afecta casi en su totalidad la posibilidad de darse a entender de forma plena, por lo cual en el auto recurrido se dijo que tal discapacidad podría incidir en su comprensión del alcance y connotación del allanamiento a la demanda. Por eso, esa contestación con allanamiento a la demanda, así como el de su hija Silvia María Bernal Dueñas a su nombre, a juicio del juzgado, desconoce la Ley 1996/19, artículo 9º, precisamente porque no se especifica o menciona el apoyo a que se refiere esa ley, ni se aporta la prueba que acredite el contenido del artículo 16 de la misma.

Tampoco debe perderse de vista que el juez debe prevenir cualquier tipo de colusión o fraude, tal y como se autoriza ampliamente en los artículos 42 y ss del CGP.

Ahora bien, los acuerdos de apoyo (Título II, artículos 8 y ss. De la Ley 1996/17), implican su formalización mediante la iniciativa de la persona que los requiere; en ese sentido, el juzgado no podía condicionar la intervención de la demandada Dueñas Bernal en el proceso judicial que nos atañe, a que agotara el trámite para la formalización de acuerdos de apoyo previsto en el Decreto 1429 de 2020.

El despacho no está desconociendo esa potestad de la demandada, de acudir ante el juzgado de familia y no se desconoce su capacidad formal, sin embargo, este juzgador consideró que, en aras de arropar de legalidad su actuación, debía designársele un curador que la representara y se lograra así preservar los derechos y garantías de la señora Dueñas de Bernal.

Ergo, no se repone la decisión objeto del recurso horizontal interpuesto por el apoderado judicial de los señores José Gregorio Dueñas Ordóñez y Araminta Dueñas Ordóñez.

En relación con el recurso de apelación subsidiariamente propuesto, teniendo en cuenta que éste es un proceso de mínima cuantía (Cfr. Auto admisorio de fecha 10 de febrero de 2021) y por ello de única instancia, el recurso subsidiario no procede.

Se observa que el designado curador ad litem, doctor Fabio Hernán Corredor Polo ya contestó la demanda en nombre de la demandada María del Carmen Dueñas de Bernal, así, en aplicación del principio de la economía procesal, se tendrá por contestado el traslado.

Notifíquese. JESUS MARINO BELTRAN CRUZ, Juez.

Firmado Por:
Jesus Marino Beltran Cruz
Juez
Juzgado Municipal
Juzgado Promiscuo Municipal
Cubarral - Meta

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **bad0dc42ee916a7a46672ee32edecfec954477b8153fc5b2f2a6fb8a9cd19017**

Documento generado en 21/09/2022 12:46:30 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

Juzgado Promiscuo Municipal
Carrera 9 No. 8-12 San Luis de Cubarral (Meta)
Correo electrónico institucional: J01prmcubarral@cendoj.ramajudicial.gov.co